

Por el Lic. Oscar Dores, Director de Fundelec

HAY QUE RECOMPONER AL SECTOR ELÉCTRICO COMO BIEN SOCIAL

A quince años de la transformación eléctrica que relevó al país de las restricciones energéticas, hoy Argentina muestra un panorama de retroceso inversor como consecuencia de la fuerte crisis socio-económica del 2001 que, por demora en las decisiones políticas, aún afecta a todo el sector. Más allá de las ideologías, el desafío hoy es asegurar este servicio esencial para todos.

A fines del 2007, se cumplieron 15 años de la transformación del servicio eléctrico argentino. Una transformación que, más allá de las ideologías políticas, ha sido modelo en el mundo por la rápida recuperación que logró en los primeros años de su aplicación. Sin embargo, en este último período, se reinstaló en el país un escenario de escasez energética que pone nuevamente en debate político al modelo y sus consecuencias.

Analizando este período, debemos señalar que el sector eléctrico es básicamente mixto, en donde hay distribuidoras, transportistas y generadoras con distinta procedencia de capital (con participación pública y privada). También es bueno reconocer que el sector público fue siempre el gran formador de recursos humanos y que el privado, en cambio, se especializó más en mejorar la eficiencia en la gestión. De la combinación ideal de ambos debiera surgir un servicio público eléctrico de la calidad que los usuarios, clientes o consumidores merecemos.

Pero, más allá de este balance global, los números son elocuentes a la hora de explicar la recuperación que vivió la industria eléctrica.

Las estadísticas de la oferta y la demanda

Según datos oficiales, en los últimos 15 años, el consumo eléctrico se incrementó casi un 120%: en los primeros 10 años se consumieron 26.300 GWh más, mientras que en los últimos cinco años -del 2002 al 2007- se sumaron 27.600 GWh. Es decir, en este segundo período se concentró el mayor crecimiento de la demanda.

Un crecimiento exactamente inverso se experimentó con la oferta: en este mismo período de 15 años, la capacidad instalada para la generación eléctrica subió un 82,6%, concentrada -en cambio- en la primera década, cuando se agregaron casi 10.000 MW de potencia a los 13.267 existentes en 1992. Desde 2002 a 2007, por el contrario, sólo se agregaron 1.400 MW.

Es evidente que la industria eléctrica sufrió, al igual que todos los sectores del país, las consecuencias de una fuerte crisis socio-económica. A esto se suma la

indefinición política que no contribuyó al proceso inversor para continuar en un camino ascendente.

Aquél nuevo escenario legal y económicamente estable de los primeros años de la transformación, **mutó a una coyuntura de indefinición que restó confiabilidad para la inversión**, tanto en el ámbito público como privado. Esto, sumado a las lógicas imperfecciones de todo sistema, operaron negativamente sobre el funcionamiento del mercado eléctrico, que hoy se sostiene con la sobreinversión que existió en distribución y generación previo a la crisis del 2001, y con el aporte de fondos públicos que permitieron subsanar las falencias del sistema en cuanto a la evolución general del transporte eléctrico. Además de los subsidios públicos a los que se recurrió (y aún se recurre) para no aumentar las tarifas eléctricas en la jurisdicción nacional y que no son sostenibles en el tiempo.

Por eso llegamos hoy a este complejo escenario de retroceso en la inversión, que -repetimos- tiene fuerte anclaje en la indefinición política del mercado eléctrico que desdibujó el funcionamiento del actual sistema y que no permite que opere tal como fue pensado. Pero, además, esta situación está afectada por **la espectacular crecida que experimenta la demanda eléctrica**, tal como se ve en las estadísticas anteriormente expuestas. Tanto es así que el aumento en la demanda eléctrica termina siendo determinante en la aplicación de las restricciones eléctricas a la industria.

La demanda crece gracias a la recuperación económica del país, pero también por la falta de señales que indiquen la real escasez energética que vive el país: tanto en los precios como en las campañas mediáticas. **El consumo residencial es el que marca el ritmo de las decisiones oficiales respecto de la exportación de gas y las limitaciones en la potencia de consumo eléctrico a la industria.** Y no está mal dar prioridad al usuario residencial, después de todo es una decisión política, pero sí mantenerlo desinformado y sin señales sobre cuál es la situación energética del país, porque por este sendero sólo se logrará profundizar aún más las dificultades.

Presente y futuro

Es imprescindible empezar a dar señales claras de la situación energética, la readecuación de los precios sería sólo una. Lo fundamental es renegociar los contratos de concesión y llevar adelante una campaña cultural para un uso responsable de la energía, a la que habría que sumar también el servicio de agua y saneamiento.

Pero así como se decidió -en su momento y porque había respaldo para hacerlo- **dar prioridad a otras urgencias sociales antes que al sector eléctrico, incluso usando su capacidad para ello, ahora es necesario atender las urgencias de**

esta industria porque es la base de un servicio público esencial, cuyo valor social es imperativo para la vida de todos los ciudadanos.